



El emprendimiento como eje conector entre las políticas públicas y el turismo

Entrepreneurship as a Connecting Axis between Public Policies and Tourism

Ismel Bravo Placeres¹, José Manuel Ramírez Hurtado², Juan Manuel Berbel Pineda²

¹Universidad de Guayaquil, Ecuador

²Universidad Pablo de Olavide, España

KEYWORDS

Entrepreneurship
Entrepreneurial culture
Public policies
Tourism
Competitiveness
Economic growth

ABSTRACT

With the purpose of critically analyzing entrepreneurship as an expression of economic development, this research aims to unravel the historical and conceptual transformations that have shaped this phenomenon, from classical views centered on individual capacities to its current positioning as a strategic axis of public policies. To this end, a methodology based on documentary review and comparative analysis of specialized literature and case studies in Latin America was employed, using a multidisciplinary approach that incorporates contributions from economics, sociology, and psychology. The results show that entrepreneurship rests on three fundamental dimensions: technological innovation as a driver of competitiveness, its direct association with economic growth, and the construction of an entrepreneurial culture that socially legitimizes this practice. However, they also reveal the tensions between necessity-driven and opportunity-driven entrepreneurship, as well as the heterogeneity of logics that sustain it in contexts of vulnerability. The discussion highlights the limitations of the economicistic narrative, as it fails to account for the cultural, social, and historical determinants that shape entrepreneurial action. In conclusion, it is argued that entrepreneurship constitutes a complex and multidimensional phenomenon whose effectiveness as a development strategy requires public policies sensitive to local realities, oriented not only toward wealth creation but also toward equity, social cohesion, and sustainability.

PALABRAS CLAVE

Emprendimiento
Cultura
emprendedora
Políticas públicas
Turismo
Competitividad
Crecimiento
económico

RESUMEN

Con el propósito de analizar críticamente el emprendimiento como expresión del desarrollo económico, la investigación se orienta a desentrañar las transformaciones históricas y conceptuales que han configurado este fenómeno, desde las visiones clásicas centradas en las capacidades individuales, hasta su actual posicionamiento como eje estratégico de políticas públicas. Para ello, se empleó una metodología de revisión documental y análisis comparado de literatura especializada y estudios de caso en América Latina, con un enfoque multidisciplinario, que articula aportes de la economía, la sociología y la psicología. Los resultados muestran que el emprendimiento se sostiene en tres dimensiones fundamentales: la innovación tecnológica como motor de competitividad, su asociación directa con el crecimiento económico, y la construcción de una cultura emprendedora que legitima socialmente esta práctica; sin embargo, también revelan las tensiones entre el emprendimiento por necesidad y por oportunidad, así como la heterogeneidad de lógicas que lo sustentan en contextos de vulnerabilidad. La discusión evidencia las limitaciones del relato economicista, al no considerar los condicionantes culturales, sociales e históricos que atraviesan la acción emprendedora. En conclusión, se plantea que el emprendimiento constituye un fenómeno complejo y multidimensional, cuya eficacia como estrategia de desarrollo requiere políticas públicas sensibles a las realidades locales, orientadas no solo a la generación de riqueza, sino también a la equidad, la cohesión social y la sostenibilidad.

RECIBIDO: 09/09/2025
ACEPTADO: 19/01/2026

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7^a)

Bravo Placeres, I., Ramírez Hurtado, J.M., Berbel Pineda, J.M. (2026) El emprendimiento como eje conector entre las políticas públicas y el turismo. *Prisma Social revista de ciencias sociales*, 52, 70-93. <https://doi.org/10.65598/rps.5980>

1. Introducción

El emprendimiento constituye hoy un tema de gran vigencia que continúa desafiando a teóricos y académicos en su definición, análisis e interpretación (Solís Montoya y Castillo Herrera, 2021). Su desarrollo histórico revela una trama conceptual diversa: desde la noción de *entrepreneur* como tomador de riesgo en Cantillon y los fisiócratas (Rodríguez y Jiménez, 2005), pasando por el “trabajador superior” de Say y la ética racionalizada del empresario en Weber (1984), hasta su consagración como agente de la “destrucción creativa” en Schumpeter (1928) y la alerta emprendedora que coordina mercados en Kirzner (1973). Esta pluralidad teórica, alimentada por aportes neoclásicos y debates interdisciplinarios –de la economía a la sociología, la psicología o la historia–, ha consolidado un campo sin una teoría unificada, pero sí caracterizado por la convergencia de escuelas económica, conductual, psicológica-cognitiva y de procesos (Gartner, 1988; Bygrave y Hofer, 1991; Shaver y Scott, 1991; Shane y Venkataraman, 2000).

A partir de esta revisión crítica, este artículo propone situar el emprendimiento como un factor de conexión entre las políticas públicas y el sector turístico, iluminando sus tensiones y potencialidades. Como sostienen Audretsch y Thurik (2001), las políticas públicas pueden potenciar la capacidad del emprendimiento para generar desarrollo endógeno, especialmente en contextos locales donde la innovación depende tanto del capital social como del entorno institucional. En esta perspectiva, el emprendimiento actúa no solo como motor económico, sino como mecanismo de articulación social que incorpora valores de sostenibilidad, inclusión y cohesión territorial (Wadhwani y Lubinski, 2025).

El presente estudio tiene como objetivo analizar críticamente la evolución teórica del emprendimiento y su vinculación con las políticas públicas orientadas al turismo, a fin de comprender su papel en los procesos de desarrollo contemporáneos. Se parte de la hipótesis de que el emprendimiento turístico puede constituirse en un puente operativo entre la acción estatal y la iniciativa comunitaria, contribuyendo tanto a la sostenibilidad económica como a la cohesión social y ambiental.

Desde un enfoque cualitativo, de alcance analítico y comparativo, se realiza una revisión documental sistematizada sobre fuentes académicas e institucionales, complementada con el análisis de estudios de caso latinoamericanos. Se aplicaron criterios de selección intencionada de materiales recientes (2015–2025) y una matriz de análisis categorial para identificar dimensiones conceptuales, contextuales y empíricas del emprendimiento turístico. Este procedimiento permitió contrastar la coherencia entre políticas públicas, prácticas emprendedoras y resultados en sostenibilidad, equidad e inclusión social.

De esta forma, el estudio busca demostrar en qué medida el emprendimiento puede constituirse en un verdadero vínculo entre la política pública y la vitalidad del tejido turístico local, orientando las decisiones hacia impactos tangibles en bienestar social, cohesión comunitaria y resiliencia ambiental.

2. Metodología

La investigación se apoya en la metodología cualitativa y documental (Ruiz Olabuenága, 1996). La selección de fuentes, políticas y casos se realizó bajo criterios rigurosos que garantizan la coherencia interna del estudio y su validez científica. En primer lugar, para la construcción del marco teórico se seleccionaron fuentes académicas que cumplieran con criterios de relevancia conceptual y actualidad, abordando directamente los ejes de análisis: emprendimiento, políticas públicas y turismo. La autoridad académica de las fuentes fue otro criterio clave, privilegiando artículos indexados, libros de editoriales reconocidas y documentos de organismos internacionales como la OMT, CEPAL y BID.

En cuanto a la selección de políticas públicas, se aplica el criterio de pertinencia temática, considerando exclusivamente aquellas orientadas al fomento del emprendimiento turístico a nivel

nacional, regional y local, siempre que contaran con documentación verificable (planes, programas, evaluaciones), unido a elementos de innovación y potencial de replicabilidad.

El estudio de caso responde al criterio de representatividad, a razón de ilustrar con claridad la interacción entre emprendimiento y políticas públicas en el ámbito del turismo comunitario, teniendo la diversidad contextual como eslabón conceptual.

La evidencia empírica fue otro de los criterios seleccionados dentro de esta categoría, considerando únicamente aquellos casos que presentaran datos verificables, metodologías claras definidas, y resultados debidamente documentados. Asimismo, se valoró el impacto social y ambiental de cada experiencia, en particular en lo relativo a la sostenibilidad, la cohesión comunitaria y la equidad.

El presente estudio, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general previamente enunciado, se plantea como objetivos específicos los siguientes: a) analizar experiencias territoriales de emprendimiento turístico comunitario, a partir de estudios de caso que evidencien sus impactos en términos de sostenibilidad, cohesión social y equidad; y b) contrastar las narrativas institucionales y académicas en torno al emprendimiento, poniendo de relieve las tensiones entre el enfoque predominantemente económico y aquellas perspectivas que reconocen su dimensión relacional, cultural y estructural.

La población analítica está constituida por (i) el corpus teórico clásico y contemporáneo sobre emprendimiento (desde Cantillon, Say, Weber, Schumpeter y Kirzner hasta debates recientes), (ii) documentos de política y programas públicos vinculados al fomento emprendedor y al sector turístico (p. ej., marcos normativos e iniciativas en Chile, Colombia y Ecuador), y (iii) experiencias territoriales documentadas, entre ellas el caso comunitario turístico en el Estado Cojedes (Venezuela). Se empleó muestreo intencional para seleccionar obras, informes y casos que acreditaran relevancia temática, trazabilidad bibliográfica y evidencia descriptiva suficiente. Criterios de inclusión: fuentes académicas arbitradas, informes técnicos e institucionales, y estudios de caso con descripción metodológica y resultados verificables. Criterios de exclusión: piezas sin soporte empírico, reseñas periodísticas no documentadas y referencias duplicadas o incongruentes.

Los procedimientos de recolección se estructuraron en cuatro fases: (1) delimitación de categorías analíticas (dimensiones del emprendimiento, modalidades empresarial/comunitaria, condiciones de entorno institucionales, socioculturales y de mercado, e impactos en sostenibilidad, equidad y desarrollo endógeno); (2) búsqueda y cribado documental; (3) extracción y sistematización en una matriz de análisis que registró autoría, periodo, nivel de evidencia, unidad de observación, instrumentos y hallazgos clave; y (4) profundización en estudios de caso latinoamericanos.

Para garantizar la validez interna y externa de la investigación, se aplicó la triangulación documental como técnica de validación metodológica (Cisterna Cabrera, 2005), al constatar la coherencia entre estamentos y marco teórico. Procedimiento que permitió reforzar el rigor científico del análisis y asegurar la replicabilidad de los resultados, consolidando una base metodológica sólida para la interpretación del emprendimiento como eje articulador entre las políticas públicas y el desarrollo turístico.

3. Resultados

Reflexiones críticas sobre el emprendimiento como expresión del desarrollo económico

El auge contemporáneo del emprendimiento se encuentra estrechamente vinculado con las transformaciones estructurales del mundo del trabajo y las nuevas formas de organización productiva. No obstante, más allá de sus manifestaciones prácticas, el fenómeno ha alcanzado también una profunda legitimación en el plano ideológico (Teasdale et al., 2023). En este proceso, las corrientes económicas de orientación liberal han desempeñado un papel central, al construir progresivamente un discurso que sitúa al emprendimiento como un elemento clave de los cambios experimentados por la economía mundial desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente.

Dicha narrativa se ha configurado en torno a dos grandes momentos evolutivos. En una primera etapa, las escuelas económicas tradicionales procuraron desentrañar la naturaleza de esta forma de acción económica, centrándose en la dimensión individual del emprendedor y subrayando la importancia de las capacidades personales y los factores motivacionales en la puesta en marcha de iniciativas productivas (Brattström y Wennberg, 2021). Posteriormente, en una segunda etapa, las conceptualizaciones de corte macroeconómico reubicaron el fenómeno dentro de las dinámicas estructurales del desarrollo, justificando su papel como motor del crecimiento económico, especialmente en contextos donde la innovación y la competitividad constituyen factores determinantes de progreso.

Con el paso del tiempo, la conceptualización del emprendimiento ha transitado desde un enfoque centrado en los rasgos psicológicos y conductuales del sujeto emprendedor hacia otro que lo reconoce como un factor estructural del crecimiento y del desarrollo económico. Mientras las escuelas clásicas y neoclásicas lo definieron como un componente dinamizador de los mercados, los enfoques contemporáneos lo valoran como una pieza estratégica del desarrollo sostenible, al promover la innovación, la competencia y la expansión económica en marcos institucionales cada vez más complejos y globalizados.

En esta evolución histórica, puede observarse un desplazamiento conceptual que acompaña la transformación de las sociedades contemporáneas y sus sistemas productivos. El emprendimiento deja de concebirse únicamente como expresión individual del “espíritu empresarial” para entenderse como práctica social y económica vinculada a políticas públicas, innovación tecnológica y estructuras de mercado. En consecuencia, la literatura especializada ha configurado un relato económico que sintetiza la comprensión actual del fenómeno en tres grandes dimensiones: 1) El emprendimiento vinculado a la innovación y al cambio tecnológico; 2) La asociación directa entre emprendimiento y desarrollo económico; 3) Un trasfondo cultural sustentado en disposiciones y valores sociales que legitiman la figura del emprendedor.

En relación con la primera de estas dimensiones, persiste la convicción teórica de que el emprendimiento, mediante la creatividad individual y la capacidad de acción, propicia una dinámica constante de equilibrio y desequilibrio en los mercados, generando efectos de crecimiento económico. Este tipo de acción económica, que Schumpeter denominó “destrucción creativa”, se vincula estrechamente con los procesos de innovación y transferencia tecnológica en el ámbito productivo. Son precisamente estas iniciativas las que fortalecen la competitividad y dinamizan el funcionamiento de los mercados, convirtiendo al emprendimiento en un elemento articulador entre innovación, cambio tecnológico y productividad.

En relación con la segunda dimensión, referida a la asociación entre emprendimiento y desarrollo económico, los enfoques macroeconómicos contemporáneos han consolidado la hipótesis de una relación directa —y en muchos casos, mecanicista— entre ambos fenómenos (Caliskan, 2022). Esta perspectiva ha operado como un soporte ideológico que refuerza la legitimidad del comportamiento emprendedor, al ampararse en la evidencia empírica de que las economías con mayores niveles de PIB per cápita suelen exhibir también mayores índices de actividad emprendedora. A partir de esta premisa, se ha configurado un discurso que promueve la liberalización de la esfera económica y la creación de condiciones institucionales análogas a las de los países considerados modelos de desarrollo. En términos concretos, este planteamiento se traduce en la adopción de políticas de estabilidad macroeconómica, la consolidación de un Estado subsidiario y la reducción de las barreras normativas para la creación y expansión de empresas (Berjani et al., 2023).

En cuanto a la tercera dimensión, vinculada al sustrato cultural y a las disposiciones sociales, se observa la construcción de un relato que subraya la importancia de difundir y consolidar una auténtica cultura del emprendimiento. Esta narrativa legitima un conjunto de valores, actitudes y disposiciones que elevan la práctica emprendedora a la categoría de ideal social. Retoma, además, muchos de los atributos clásicos asignados al emprendedor —como el individualismo, la intuición, el esfuerzo, la disciplina, el orden y la capacidad de planificación—, al tiempo que promueve la interiorización de nuevas formas de subjetividad, asociadas a la gestión autónoma

del riesgo, la autoexigencia, la capacidad de postergar gratificaciones y la disposición a enfrentar altos niveles de incertidumbre (FPSP, 2005). De esta forma, el emprendimiento trasciende su dimensión económica para convertirse también en un dispositivo cultural que orienta comportamientos y legitima modelos de éxito individual dentro de las economías contemporáneas.

Se ha sostenido que la idea de emprendimiento se encuentra asociada a la representación social del ascenso y el éxito individual, lo que ha contribuido a otorgarle una validación transversal en diversos estratos de la población. Esta legitimación se ha articulado, en el plano conceptual, a partir del pensamiento económico clásico, que exaltó la figura del individuo autónomo como agente de progreso dentro de lo que posteriormente se denominó cultura del emprendimiento. Sin embargo, la imagen idealizada del fenómeno se confronta con sus resultados concretos: en los sectores vulnerables, la práctica emprendedora pone en cuestión la premisa de que constituye un camino universalmente deseable, ya que las desigualdades materiales, sociales y culturales condicionan de manera decisiva sus posibilidades de éxito.

La introducción de una relación mecánica en la tríada emprendimiento–crecimiento–desarrollo ha elevado el emprendimiento a la categoría de valor en sí mismo, lo que explica, en parte, su expansión en los discursos contemporáneos. No obstante, esta narrativa omite que las dinámicas del mercado se encuentran siempre insertas en estructuras culturales y condiciones materiales preexistentes (Polanyi, 2007). En consecuencia, el relato económico dominante sobre el emprendimiento presenta al menos dos limitaciones sustanciales: en primer lugar, no contempla los efectos que este fenómeno produce en el ámbito de las relaciones sociales y culturales; y en segundo lugar, pasa por alto la heterogeneidad que caracteriza al sector microempresarial, donde el emprendimiento frecuentemente se desarrolla en condiciones precarias y bajo altos niveles de riesgo.

Una de las principales deficiencias de la visión economicista del emprendimiento radica en concebirlo como un fenómeno social y culturalmente neutro, desprovisto de implicaciones en el plano de las relaciones sociales y de la subjetividad. Esta concepción, sustentada en la defensa de mayores libertades económicas y en la consolidación de una lógica competitiva, ha normativizado la relación entre emprendimiento y desarrollo, convirtiéndola en un ideal de autorrealización individual. No obstante, como advirtió Polanyi (2007), el mercado nunca actúa de manera autónoma: está profundamente imbricado en las tramas sociales y culturales que le dan sentido, y sus dinámicas inciden en dichas relaciones al mismo tiempo que son moldeadas por ellas.

En este marco, resulta fundamental distinguir entre emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. El primero se asocia con trayectorias de subsistencia y, en algunos casos, ha sido incluso considerado un indicador de pobreza; el segundo, en cambio, se relaciona con la capacidad de identificar desequilibrios entre oferta y demanda y de transformarlos en proyectos rentables mediante la innovación y la creatividad individual. Desde el relato económico dominante, existe consenso en que, en economías desarrolladas con altos niveles de PIB per cápita, el emprendimiento por oportunidad adquiere un papel preponderante frente al emprendimiento por necesidad (Larroulet y Ramírez, 2007).

El fundamento de esta concepción descansa en la premisa de que, en contextos de mayor libertad económica, las personas tenderán a esforzarse más, invertirán en su formación y emplearán sus capacidades de manera más eficiente, promoviendo un emprendimiento orientado a la innovación y, en consecuencia, al crecimiento sostenido (Larroulet y Ramírez, 2007). En este escenario, la expansión de la denominada cultura del emprendimiento cumple un papel decisivo, ya que la progresiva liberalización económica requiere de un soporte cultural capaz de movilizar la voluntad individual hacia objetivos de carácter utilitario y personalista. Sin embargo, el discurso económico dominante suele restringir los efectos de la desregulación y de la ampliación de libertades al ámbito de la vida económica, circunscribiéndolos a la lógica del mercado y omitiendo su impacto en la organización social.

Conviene subrayar, no obstante, que la difusión del emprendimiento trasciende la esfera económica –crecimiento y desarrollo–, pues conlleva transformaciones profundas en las representaciones sociales, en la estructura de oportunidades y en los vínculos que articulan la vida colectiva. En este sentido, diversos estudios han evidenciado cómo el emprendimiento repercute en la subjetividad de los grupos más vulnerables, en las percepciones que los individuos construyen sobre la sociedad y en la dinámica misma de los territorios (Márquez, 2005). El pensamiento económico, al elevar el emprendimiento a un valor social en sí mismo y normativizarlo en torno a la lógica del mercado, pierde la distancia crítica necesaria para evaluar las implicaciones culturales y relacionales de este fenómeno, reduciendo su comprensión a parámetros meramente económicos.

Por otra parte, el relato economicista omite considerar la diversidad de lógicas de acción que atraviesan el fenómeno del emprendimiento, desatendiendo la influencia que ejercen las condiciones materiales, culturales e históricas sobre las prácticas económicas. Parte de la premisa de que, en contextos de libertad y de consolidación de la cultura emprendedora, las capacidades individuales tienden a orientarse espontáneamente hacia fines utilitaristas, lo que conduciría al incremento del emprendimiento por oportunidad. No obstante, las capacidades y los recursos no se encuentran distribuidos homogéneamente; en consecuencia, los individuos ubicados en posiciones socioeconómicas más favorables, con mayor acceso a capital, educación y redes de apoyo, logran desenvolverse con mejores resultados dentro de la estructura de oportunidades disponible.

Diversos estudios han puesto en evidencia la relevancia de los factores socioculturales en la orientación de la acción emprendedora, cuestionando así la pretendida homogeneidad del fenómeno sostenida por el discurso económico dominante (Márquez, 2005). Estas investigaciones muestran que, en el ámbito de la microempresa, los sujetos suelen guiar su comportamiento económico por pautas culturales preexistentes y diversas, de modo que sus motivaciones no responden únicamente a la lógica de maximización del beneficio. Así, más allá de los estímulos económicos y de los incentivos institucionales, las orientaciones que asumen los individuos son heterogéneas y dependen de las condiciones sociales y simbólicas en las que se insertan.

La heterogeneidad de condiciones socioeconómicas y culturales que caracteriza al universo microempresarial implica la coexistencia de múltiples rationalidades en la gestión de los emprendimientos, en las motivaciones que los sustentan y en la valoración de los factores que determinan su éxito. Mientras que la lógica de la acumulación otorga centralidad al tener, la lógica del oficio resalta la continuidad del hacer y de la práctica productiva (Márquez, 2005). Estas diferencias reflejan que las rationalidades económicas no solo son diversas, sino también, en ocasiones, contradictorias, lo que vuelve inapropiado comprender el emprendimiento como un fenómeno culturalmente homogéneo. En este sentido, las categorías de oportunidad y necesidad no solo delimitan distintos grados de rationalidad económica, sino también diferentes niveles de vulnerabilidad, precariedad y capital cultural, factores que inciden directamente en las posibilidades reales de éxito de los emprendimientos.

En síntesis, las limitaciones del relato economicista sobre el emprendimiento evidencian la necesidad de incorporar categorías conceptuales que posibiliten un abordaje más amplio, capaz de reconocerlo como un fenómeno social además de económico. Esta perspectiva adquiere especial relevancia al considerar los procesos ocurridos en las últimas cuatro décadas: la consolidación de políticas neoliberales en los años noventa, el incremento sostenido del desempleo desde 1994 en numerosos países, el surgimiento de estallidos sociales y el agravamiento de la pobreza y de las desigualdades. Tales condiciones propiciaron la aparición de modalidades de emprendimiento que trascienden la búsqueda exclusiva del lucro, configurándose como respuestas orientadas a finalidades sociales concretas. De ahí la expansión y relevancia actual de experiencias vinculadas al emprendimiento social y comunitario en distintos sectores, con un especial protagonismo en el ámbito turístico (Uharte Pozas et al., 2023).

El discurso económico tradicional, por tanto, se revela insuficiente para captar la complejidad del emprendimiento en contextos de vulnerabilidad estructural. Esta insuficiencia se acentúa al

reconocer que la vulnerabilidad se ha convertido en un rasgo persistente que afecta de manera crónica a amplios segmentos de la población. En consecuencia, una representación que idealiza y generaliza la práctica emprendedora de forma acrítica no solo oculta las tensiones y antagonismos que esta asume en la realidad, sino que además consolida un imaginario distorsionado sobre sus supuestas bondades y eficacia como estrategia de gestión de la vida en escenarios de precariedad.

Lo complejo de este fenómeno radica en que, como advierten Lubinski y Knox Tucker (2025), frente a una representación que tiende a idealizar el emprendimiento, la decepción o impotencia derivada de no poder materializar la imagen que el relato económico promueve recae sobre el propio sujeto vulnerable. En la mayoría de los casos, este carece de los recursos, capacidades y soportes necesarios para afrontar tal desafío, lo que desemboca en elevados niveles de frustración. En sociedades donde el mercado asume un rol central, la difusión de un discurso inconsistente sobre el emprendimiento contribuye a una validación ideológica de pautas individuales de acción, sin que exista claridad acerca de las probabilidades reales de éxito en contextos atravesados por la precariedad socioeconómica.

En la medida en que la gestión individual de la vida demuestra ser insuficiente en contextos de vulnerabilidad estructural, la organización social tiende a reproducir dinámicas de precarización progresiva que afectan de manera extendida a la población. La vulnerabilidad y la pobreza terminan así por experimentarse como responsabilidades individuales, reducidas a la capacidad personal de acceder a oportunidades económicas, lo que desplaza y diluye la responsabilidad colectiva y estatal en la construcción de mecanismos equitativos de bienestar (Luque González et al., 2021). En este marco, la exclusión social se disfraza de incapacidad individual, invisibilizando los factores estructurales –económicos, institucionales y culturales– que la generan y sostienen. Este panorama plantea el imperativo de redefinir la orientación normativa de las sociedades contemporáneas y de repensar la arquitectura del bienestar en relación con el individuo, especialmente en un escenario marcado por crisis económicas recurrentes, segmentación social, mercantilización de servicios públicos y crisis ambientales que cuestionan la eficacia del mercado como eje regulador de las prioridades sociales y de las relaciones humanas.

Analizar el emprendimiento como expresión del desarrollo económico requiere reconocer que, históricamente, este fenómeno ha cobrado mayor protagonismo en contextos de crisis o en etapas posteriores a ellas. En tales coyunturas, el emprendimiento ha surgido tanto como un mecanismo para reactivar el crecimiento económico como una alternativa frente al desempleo y la pobreza profundizados por las transformaciones estructurales de la economía (Muhammad y Burkib, 2023). En este sentido, resulta más preciso afirmar que el emprendimiento actúa como un factor dinamizador del crecimiento, ya sea mediante la creación de innovaciones, productos, servicios y tecnologías (Gil Ibañez et al., 2025), o a través de la mejora en la productividad de bienes y servicios existentes y el fortalecimiento de la competencia en los mercados.

De manera paralela, el emprendimiento se configura también como una respuesta social ante problemáticas estructurales como el desempleo y la pobreza, especialmente entre los sectores jóvenes, para quienes representa una vía de inserción laboral y un instrumento de inclusión social. En este marco, el Estado ha asumido un papel central en el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la promoción del emprendimiento. Tales políticas, sustentadas en la premisa de que la actividad emprendedora constituye un eje estratégico para el desarrollo económico y la generación de empleo, buscan legitimar el emprendimiento no solo como motor de crecimiento, sino también como herramienta de cohesión e integración social (Lundmark et al., 2022). Sin embargo, la eficacia de estas políticas depende en gran medida de su capacidad para articular los objetivos económicos con los sociales, evitando que el discurso del emprendimiento se convierta en un mecanismo de desplazamiento de responsabilidades públicas hacia los individuos.

El emprendimiento puede entenderse también como un comportamiento adaptativo frente a las transformaciones contemporáneas del mundo del trabajo y como un elemento central en la orientación profesional. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas generan nuevas demandas, pero, al mismo tiempo, abren oportunidades para la

construcción de trayectorias individuales más flexibles y autodeterminadas (Maca Urbano y Rentería Pérez, 2020). Una de las formas más destacadas de responder proactivamente a tales exigencias y de aprovechar las posibilidades emergentes es, precisamente, a través de la actividad emprendedora (Bennett et al., 2022).

En este contexto, numerosas personas están explorando y construyendo alternativas económicas que trascienden tanto el sistema capitalista predominante como los marcos teóricos tradicionales formulados desde la academia (Dey & Verduijn, 2022). Frente a un modelo económico sustentado en la acumulación de capital –cuyo efecto más evidente es la exclusión creciente de amplios sectores sociales–, diversos emprendedores y las organizaciones que los acompañan han desplegado creatividad y capacidad innovadora para cuestionar paradigmas establecidos y promover prácticas económicas orientadas al bien común. Estas iniciativas procuran contrarrestar las dinámicas de exclusión mediante formas de acción colectiva y solidaria que reivindican la centralidad del ser humano por encima del capital.

Las prácticas de estos actores buscan revertir la lógica de alienación que concibe al ser humano únicamente como recurso destinado a la producción y generación de utilidades. Por el contrario, promueven un tipo de actividad económica concebida desde y para el ser humano, situándolo en el centro de los procesos productivos y no como un mero “engranaje” del sistema. Este cambio de enfoque se refleja en las nuevas formas de valorar el éxito, tanto entre los emprendedores como en las organizaciones de apoyo, donde se privilegia la noción de persona como sujeto integral, no reducido a su dimensión económica. La filosofía que sustenta estas experiencias parte de una premisa esencial: lo económico no constituye la totalidad ni lo más importante. Precisamente, cuando se relativiza el valor absoluto de lo económico, emergen consideraciones más complejas y trascendentes –sociales, culturales y ambientales– que enriquecen la evaluación del éxito en los procesos de emprendimiento.

En conclusión, el emprendimiento, como expresión del desarrollo económico, no puede reducirse a la visión economicista que lo concibe únicamente como motor de crecimiento o innovación tecnológica. Si bien su papel en la dinamización de los mercados y en la creación de valor resulta innegable, la historia reciente demuestra que su significado y alcance trascienden con amplitud esta mirada limitada. La proliferación de emprendimientos vinculados a la subsistencia, a la necesidad o a finalidades sociales –especialmente en contextos de vulnerabilidad– revela que se trata de un fenómeno atravesado por condicionantes culturales, sociales e históricos que deben ser reconocidos y comprendidos en toda su complejidad. Solo a partir de esta lectura integral es posible avanzar hacia modelos de desarrollo más justos, inclusivos y sostenibles.

El relato clásico que presenta al emprendimiento como un camino lineal hacia la prosperidad desconoce tanto la diversidad de motivaciones y lógicas que lo impulsan como las tensiones estructurales que enfrentan los emprendedores en escenarios de precariedad. De ahí que resulte imprescindible abordarlo como un fenómeno complejo, en el que convergen dimensiones económicas, sociales y culturales, y cuya legitimidad no puede evaluarse únicamente a partir de la creación de riqueza o de empleo. Su verdadera relevancia radica también en su capacidad para contribuir a la cohesión social, a la equidad y a la sostenibilidad, en tanto expresión de nuevas formas de acción económica y social adaptadas a los desafíos del presente.

En este sentido, el desafío contemporáneo consiste en replantear el lugar del emprendimiento dentro de los procesos de desarrollo, superando la idealización que lo asocia exclusivamente con trayectorias individuales de éxito. Reconocer su heterogeneidad y su potencial para articular respuestas colectivas a problemáticas sociales y territoriales constituye una condición indispensable para el diseño de políticas públicas más inclusivas y de marcos teóricos más integrales. Solo desde esta perspectiva es posible captar la verdadera complejidad del fenómeno en las sociedades actuales y, al mismo tiempo, proyectar modelos de desarrollo capaces de conjugar eficiencia económica con justicia social y sostenibilidad ambiental.

El emprendimiento como anclaje de las políticas públicas en el turismo

Hasta hace no mucho, el término emprendimiento apenas se utilizaba en la lengua castellana; en su lugar, era común la traducción de la palabra de raíz franco-anglófona entrepreneurship como “empresarialidad”, “empresarismo” o, sencillamente, “empresarial”. En la actualidad, sin embargo, el vocablo emprendimiento se ha naturalizado y aparece de manera recurrente en diversos espacios: desde la academia y el sector privado hasta el lenguaje cotidiano. Paralelamente, se ha consolidado como un concepto estratégico dentro de las agendas gubernamentales, que lo incorporan de manera “renovada” en sus discursos y políticas públicas (Puello Socarrás, 2010).

El contexto de crisis económicas de alcance global ha deteriorado la calidad de vida de amplios sectores sociales, lo que ha llevado a los gobiernos a promover el emprendimiento como una herramienta clave para enfrentar el desempleo y estimular el desarrollo económico local. En un primer momento, esta orientación resultó más visible en países en vías de desarrollo, donde se concebía el emprendimiento como una estrategia de supervivencia frente a la informalidad y el desempleo estructural. No obstante, en la actualidad, dicha tendencia también se ha extendido a economías desarrolladas, que ven en el emprendimiento un mecanismo para dinamizar sectores emergentes y reactivar economías basadas en el conocimiento.

De este modo, el emprendimiento ha sido adoptado con fuerza como eje articulador de reformas en el Estado y la Administración Pública, transformando la manera en que se conciben los procesos de diseño e implementación de políticas públicas. Su incorporación en la retórica gubernamental responde a un giro discursivo que lo asocia con valores de autonomía, innovación y eficiencia, desplazando la noción de bienestar colectivo hacia un paradigma sustentado en la responsabilidad individual y la competitividad. Esta reconfiguración del discurso político-económico ha permitido legitimar una nueva forma de gobernanza, donde la promoción del emprendimiento opera simultáneamente como estrategia de crecimiento económico y como herramienta de regulación social.

En consecuencia, el emprendimiento no solo ha sido revitalizado como categoría económica, sino que ha adquirido una fuerza simbólica inusitada al configurarse como principio rector de la acción estatal y como referente cultural de las nuevas ciudadanías. Su constante apelación en los discursos públicos, en los programas de fomento y en las políticas sectoriales —entre ellas, las turísticas— refleja las transformaciones más recientes que atraviesan las sociedades contemporáneas. En el caso del turismo, estas transformaciones adquieren especial relevancia al entrelazar dinámicas económicas, sociales y territoriales que demandan enfoques de desarrollo más inclusivos y sostenibles.

En pleno siglo XXI, resulta imposible desconocer la relevancia del emprendimiento como motor de dinamización de las economías en sus distintos niveles, como alternativa para impulsar el desarrollo social y como fuente de innovación tecnológica. En este contexto, se vuelve indispensable que el Estado promueva políticas públicas sostenibles que fortalezcan la articulación entre los sectores público y privado, a fin de consolidar ecosistemas emprendedores integrales. No obstante, estos resultados no suelen ser inmediatos ni fácilmente visibles, ya que todavía falta consolidar una convicción clara respecto de los beneficios estructurales del emprendimiento y, sobre todo, porque la tarea de construir una verdadera “red de emprendimiento” implica integrar múltiples actores y comprometer recursos institucionales, financieros y humanos significativos (Rodríguez & Jiménez, 2005).

El Estado, a través del diseño e implementación de políticas públicas, se ha consolidado como uno de los principales impulsores del emprendimiento, bajo la premisa de que este constituye un elemento esencial para el desarrollo económico y la generación de empleo. Sin embargo, dichas políticas no pueden entenderse únicamente como acciones de carácter público, pues involucran también la participación activa de agentes privados, organizaciones civiles, instituciones académicas y comunidades locales. En este marco, el emprendimiento se proyecta como una estrategia de inclusión social y territorial, al tiempo que se presenta como una alternativa frente

a la escasez de oportunidades laborales y de ingresos en contextos de crisis o reestructuración productiva.

El respaldo estatal al emprendimiento debería considerar dos factores centrales: el componente humano, referido a las motivaciones, capacidades y aspiraciones de las personas emprendedoras; y el componente estructural, vinculado a las condiciones institucionales, económicas y culturales que determinan las posibilidades de éxito de los proyectos. Por ello, los programas de apoyo público —como los orientados a la creación y consolidación de nuevas empresas— deben inscribirse en un marco amplio que abarque dimensiones sociales, territoriales y ambientales, evitando reducir su alcance a los aspectos meramente financieros (Chalmers et al., 2025).

Desde esta perspectiva, el emprendimiento no solo puede concebirse como un proceso económico, sino como una red de relaciones e influencias institucionales, políticas y culturales que orientan las prácticas y valores de la población. En este sentido, Maca Urbano y Rentería Pérez (2020) sostienen que el emprendimiento se inscribe en las lógicas de la gubernamentalidad neoliberal, en la medida en que el Estado transfiere al individuo responsabilidades que antes le eran propias, como la generación de empleo o las garantías sociales asociadas al mismo. Así, la figura del emprendedor se erige como un nuevo sujeto económico y moral, encargado de gestionar sus propias oportunidades laborales en un contexto donde la precarización se disfraza de autonomía (Chalmers et al., s.f.). Este desplazamiento evidencia cómo el emprendimiento, además de ser una herramienta de desarrollo económico, constituye un dispositivo político y cultural que redefine las relaciones entre el Estado, el mercado y la ciudadanía.

Los emprendimientos se reconocen hoy como una forma renovada de organización que responde a la evolución misma del mercado y a las transformaciones estructurales de la economía global. Se les atribuye un papel protagónico en las economías en desarrollo, no solo por su capacidad de generar empleo, sino también por ofrecer soluciones innovadoras a problemas concretos, añadir valor a los procesos productivos y formular propuestas creativas en bienes y servicios capaces de captar y mantener la preferencia de los consumidores. Al introducir iniciativas disruptivas y originales, los emprendimientos impulsan transformaciones significativas en los mercados, los métodos de producción y los modelos organizativos (Greco & Jong, 2017). La mayoría de estas iniciativas se desarrollan en el ámbito privado, aunque adquieren una dimensión pública cuando emergen desde lo comunitario y redistribuyen sus beneficios entre los integrantes de un territorio.

Ahora bien, la permanencia y el crecimiento de los emprendimientos no dependen exclusivamente de las capacidades individuales de quienes los impulsan, sino también de un entramado de factores externos entre los que destacan las políticas, programas y acciones —o incluso las omisiones— del Estado en sus distintos niveles. A ello se suman las iniciativas de apoyo provenientes de organizaciones de la sociedad civil, que con frecuencia constituyen un respaldo esencial para el fomento y la sostenibilidad de estos proyectos. Sin embargo, como advierten diversas experiencias de emprendedores individuales y colectivos (Maccarini, 2008), las limitaciones estructurales del aparato estatal —su burocracia, inefficiencia o demoras administrativas— terminan por convertirse en obstáculos que afectan no solo el surgimiento, sino especialmente la formalización y consolidación de los emprendimientos.

La citada autora señala que, en muchos casos, los principales inconvenientes que enfrentan los emprendedores provienen del propio Estado. Las normativas excesivamente rígidas y las condiciones desactualizadas para acceder a una habilitación comercial constituyen una de las barreras más recurrentes, pues no se ajustan a la dinámica real ni a las necesidades específicas de los emprendimientos. A ello se suma la desigualdad en la aplicación de controles y la existencia de prácticas de connivencia o acuerdos tácitos entre empresas dominantes y autoridades locales, lo que profundiza las asimetrías competitivas. Finalmente, destaca la falta de articulación entre dependencias gubernamentales del mismo nivel o entre distintos niveles de gobierno, situación que obstaculiza la coordinación interinstitucional y debilita la eficacia de las políticas de fomento. En consecuencia, la ausencia de una gobernanza coherente y colaborativa termina restando fuerza a los esfuerzos por consolidar ecosistemas emprendedores sostenibles e inclusivos.

Así, se concluye que, detectadas estas limitaciones, la asistencia estatal resulta accesible únicamente para aquellos emprendedores que poseen conocimientos técnicos y administrativos específicos sobre cómo formular un proyecto, analizar su viabilidad, registrar adecuadamente la información sobre su desarrollo y llevar una contabilidad ordenada. En consecuencia, quedan excluidos de la asistencia financiera quienes enfrentan dificultades en dichos ámbitos, situación agravada por la exigencia de garantías reales o solidarias, los prolongados tiempos de maduración de la actividad y la irregularidad en los flujos de fondos propios de los proyectos productivos.

Las políticas gubernamentales serían considerablemente más efectivas si, en lugar de imponer una regulación excesiva que restringe la iniciativa privada, se orientaran a estimular el crecimiento, la innovación y el surgimiento de nuevos negocios basados en el conocimiento y la creatividad. Una política pública que aspire a fomentar verdaderamente el emprendimiento debe diseñarse con sensibilidad hacia las particularidades de los emprendedores y de sus contextos, considerando la rama de actividad, la estructura y dinámica del mercado, así como los condicionamientos sociales y territoriales que inciden en su desarrollo.

Diversos estudios muestran que los países que han apostado por economías basadas en el conocimiento y en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor tienden a registrar tasas de desempleo más bajas. Ello se explica porque la innovación y el emprendimiento no solo generan nuevas oportunidades laborales, sino que también propician la creación de empresas que dinamizan el tejido productivo y amplían la base económica local.

Sin embargo, esta relación no siempre se manifiesta de manera lineal, ya que depende de múltiples factores de orden económico, institucional y social. Si bien el impulso al emprendimiento y la innovación abre puertas a nuevos negocios y puede potenciar el crecimiento económico, el éxito de estas iniciativas está condicionado por variables como el acceso a recursos, la existencia de redes de apoyo, el nivel educativo y, de forma decisiva, el respaldo del Estado y de la sociedad en su conjunto. En este escenario, los gobiernos locales desempeñan un papel estratégico como facilitadores y articuladores: gracias a su capacidad de convocatoria, pueden coordinar instituciones, organizaciones y actores clave para fortalecer los ecosistemas emprendedores, generar sinergias territoriales y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Ejemplos como los de Chile, Rumanía e Islandia demuestran que es posible mejorar los indicadores económicos y sociales cuando se adopta el emprendimiento como eje transversal de la política pública. En estos países, los gobiernos han reconocido el potencial transformador del emprendimiento y, en consecuencia, el desarrollo de ecosistemas emprendedores se ha convertido en un foco prioritario de estudio y acción (Manning y Vavilov, 2023). Dichos ecosistemas se sostienen en factores como el liderazgo institucional, la consolidación de una cultura emprendedora, la existencia de mercados de capital dinámicos y la disposición de los consumidores a experimentar con nuevas propuestas (Zamora Boza, 2018).

El progreso de una comunidad depende, en buena medida, de la libertad de acción y la capacidad de agencia de sus miembros, quienes, mediante su interacción, buscan alcanzar el bienestar colectivo. Este bienestar implica no solo mejorar la calidad de vida y ampliar el acceso a bienes y servicios —tanto básicos como complementarios—, sino también hacerlo dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Desde esta concepción de sociedad, la promoción de una cultura emprendedora adquiere un valor estratégico, especialmente cuando el Estado asume un rol activo en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos orientados a su fortalecimiento.

En este proceso, el sistema educativo emerge como el mecanismo más idóneo para sembrar y consolidar la cultura emprendedora, dada su capacidad para transformar actitudes, comportamientos y formas de pensamiento. Actualmente se reconoce que la educación para el emprendimiento es ya una realidad en expansión, y que resulta prioritario consolidarla mediante políticas públicas que trasciendan la lógica del beneficio económico para integrar el bienestar social y colectivo. Desde esta perspectiva, las competencias emprendedoras deben ir más allá de

la capacidad de gestionar un negocio: deben incorporar valores cívicos, solidaridad, responsabilidad social y prácticas alineadas con principios democráticos y éticos. Solo así el emprendimiento podrá consolidarse como una auténtica herramienta de transformación integral.

En consecuencia, los gobiernos están llamados a impulsar políticas públicas en las que la educación se constituya en pilar fundamental para cultivar una cultura emprendedora creativa, innovadora y socialmente responsable, capaz de sostener una convivencia democrática. Se trata de una cultura orientada no solo al crecimiento económico, sino también a un desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso con las personas y con la naturaleza, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las agendas globales contemporáneas.

Esta tendencia, que ha convertido al emprendimiento en un vector clave dentro del diseño e implementación de las políticas públicas, se manifiesta hoy en numerosos países. Aunque en la práctica los proyectos de fomento al emprendimiento suelen involucrar tanto a actores públicos como privados, resulta decisiva la arquitectura institucional que se configure alrededor del fomento productivo, así como la creciente asignación de recursos públicos destinados a este fin. Todo ello evidencia la relevancia estratégica que el emprendimiento ha adquirido en los modelos de desarrollo contemporáneos.

En el ámbito del emprendimiento empresarial, los recursos públicos de fomento productivo constituyen una inversión social al facilitar la creación de nuevas empresas y favorecer su fortalecimiento, diversificación e incorporación de innovaciones en productos, servicios y procesos de gestión. Bajo este enfoque, el apoyo estatal trasciende la mera asistencia financiera para traducirse en mayores niveles de competitividad, productividad y bienestar social, expresados en la generación de empleo y la reducción de la pobreza. En términos generales, estas políticas suelen estructurarse sobre tres ejes esenciales: el financiamiento, la capacitación y la innovación (González Velastin, 2012).

Los gobiernos enfrentan el reto de incentivar el emprendimiento en todas las ramas de la economía, y el turismo constituye un sector especialmente sensible a estas dinámicas. De ahí la importancia de articular e interconectar las instituciones públicas que, desde diferentes ámbitos, participan en el fomento productivo. Ahora bien, la consolidación de este entramado institucional no solo refleja el protagonismo del emprendimiento como eje de las políticas públicas, sino también el crecimiento sostenido de los recursos e inversiones destinados a fortalecerlo.

En el campo del turismo como anclaje de las políticas públicas, la literatura especializada ha destacado su potencial emprendedor como generador de beneficios colectivos, particularmente por su capacidad de dinamizar economías locales, preservar el patrimonio cultural e impulsar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, diversas investigaciones (Maccarini, 2008) advierten que en numerosas experiencias internacionales —y especialmente en América Latina— las políticas turísticas tienden a priorizar la atracción de grandes inversiones, relegando los microemprendimientos que, pese a su menor escala, representan fuentes significativas de empleo digno, cohesión comunitaria y fortalecimiento de las identidades territoriales.

En efecto, la acción estatal suele concentrar esfuerzos en proyectos turísticos de gran escala, nacionales o extranjeros, capaces de generar cientos de empleos directos, pero sin valorar suficientemente los riesgos asociados: la concentración de beneficios, la competencia desigual, la asimetría en el acceso a la información y a los recursos públicos, la inequidad en la distribución del ingreso y, no menos importante, los impactos ambientales que tales iniciativas pueden ocasionar. Este panorama plantea interrogantes cruciales para el debate contemporáneo sobre el desarrollo turístico:

¿qué tipo de desarrollo se busca promover en cada destino?, ¿quiénes resultan realmente beneficiados a largo plazo?, ¿es más conveniente para el desarrollo sostenible apoyar a cientos de microemprendimientos locales o concentrar recursos en unas pocas grandes inversiones? Y, sobre todo, ¿es posible diseñar políticas públicas integrales capaces de armonizar ambas

dimensiones —la empresarial y la comunitaria— en un equilibrio que favorezca tanto la competitividad económica como la justicia social y la sostenibilidad ambiental?

En definitiva, el dilema entre priorizar grandes inversiones turísticas o fortalecer los microemprendimientos locales no puede resolverse únicamente a partir de indicadores inmediatos de empleo o ingresos, sino que exige una reflexión más profunda sobre el modelo de desarrollo que cada territorio busca consolidar. Apostar por un turismo sustentable, inclusivo y generador de valor social y ambiental implica diseñar políticas públicas capaces de equilibrar ambos polos, evitando que los beneficios se concentren en unos pocos actores y garantizando que la actividad turística se traduzca en oportunidades reales para las comunidades locales. En este sentido, la incorporación de indicadores de sustentabilidad, tal como recomienda la Organización Mundial del Turismo, constituye una herramienta fundamental para medir avances, corregir desequilibrios y asegurar que el turismo no se limite a ser un motor económico, sino que se erija en un verdadero catalizador de cohesión social y de respeto al entorno natural.

Dentro de este marco, el turismo sustentable comunitario se configura como una modalidad especialmente relevante, al estar concebido desde la participación activa de las comunidades y en respuesta a sus propias necesidades. En este contexto, el emprendimiento comunitario se erige como un instrumento clave para impulsar esta forma de desarrollo, habiendo sido reconocido como una alternativa viable frente a los grandes desafíos sociales y medioambientales contemporáneos (Greco y Jong, 2017). Bajo este modelo organizativo, la innovación social adquiere un papel protagónico al permitir identificar problemáticas locales, transformar desafíos en oportunidades y generar aportes concretos a la sustentabilidad y al bienestar colectivo.

Así, el emprendimiento comunitario sustentable se consolida como una herramienta que articula a múltiples actores —instituciones públicas, organizaciones locales y comunidades— en la planificación, ejecución y gestión de proyectos que distribuyen de manera equitativa sus beneficios, conforme a principios de comercio justo y de economía social. La interacción entre turismo sustentable y emprendimiento comunitario configura una estrategia híbrida para el desarrollo local, capaz de fortalecer las identidades culturales, diversificar las economías territoriales y mantener un equilibrio entre los recursos tangibles e intangibles. De ahí la importancia de que las políticas públicas locales orienten sus esfuerzos a consolidar este tipo de iniciativas, garantizando su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Por último, una visión económica del turismo verdaderamente integral requiere reconocer sus límites y externalidades, tanto los visibles como aquellos más difusos que atraviesan las dimensiones sociales, culturales y ecológicas. Allí donde surgen países, regiones o localidades turísticas, emergen también sociedades turísticas, caracterizadas por su capacidad de transformar realidades locales, regionales o incluso nacionales. Comprender estas dinámicas es esencial para construir un enfoque de política pública que reconozca al turismo —y, dentro de él, al emprendimiento— como una práctica social compleja, generadora de vínculos, sentidos y pertenencias, además de recursos económicos.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente considerar que los emprendimientos que colocan en el mercado bienes y servicios dirigidos al turismo deben entenderse como emprendimientos turísticos. En consecuencia, corresponde al Estado y a los gobiernos locales diseñar políticas públicas orientadas a su fomento y respaldo, siempre bajo un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad. Dichas políticas cumplen un papel esencial no solo en la promoción de nuevos emprendimientos, sino también en su consolidación durante las etapas iniciales de funcionamiento y crecimiento, cuando las condiciones de riesgo e incertidumbre son más elevadas.

El atractivo de una región para la creación de negocios turísticos está condicionado por múltiples factores: las políticas fiscales, laborales, de investigación y de capital de riesgo, así como el marco legal, la estabilidad institucional y las garantías de seguridad. En definitiva, aunque diversos elementos influyen en el potencial de desarrollo de un emprendimiento turístico, no cabe duda de que el apoyo estatal y la orientación estratégica de las políticas públicas constituyen variables decisivas para su éxito o fracaso.

De ahí que el emprendimiento se haya consolidado como un eje estratégico en el diseño de las políticas públicas vinculadas al turismo, no solo por su capacidad para generar empleo e ingresos, sino también por su potencial para impulsar un desarrollo más inclusivo, sostenible y territorialmente equilibrado. Sin embargo, la efectividad de estas políticas dependerá de la manera en que logren articular el apoyo a los grandes proyectos de inversión con el fortalecimiento de los micro y pequeños emprendimientos locales, que con frecuencia representan la base de la identidad cultural y de la sostenibilidad comunitaria.

En este sentido, el desafío de los gobiernos consiste en diseñar marcos de acción integrales que reconozcan al emprendimiento turístico como motor de transformación territorial, capaz de reducir brechas, diversificar la economía local y consolidar un modelo de desarrollo endógeno, sustentado en la participación de las comunidades y en el equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del turismo.

4. Discusión

Programas de emprendedores desde una visión internacional: los estudios de casos de la región latinoamericana

El examen comparado de los programas de emprendimiento en América Latina, desde una mirada internacional, revela tensiones estructurales que condicionan la efectividad de las políticas públicas en la región. A diferencia de los modelos asiáticos –en particular el caso chino– donde el emprendimiento se integró como componente estratégico de un proyecto nacional de desarrollo, orientado a la reducción de la pobreza y a la consolidación de una clase media en expansión, en América Latina predomina un enfoque fragmentado, discontinuo y de corto plazo. Esta diferencia refleja no solo la brecha institucional entre ambos contextos, sino también las divergencias en las concepciones del rol del Estado y de la planificación en la economía.

Mientras el modelo asiático se apoya en una fuerte capacidad estatal y en la coherencia entre las políticas de emprendimiento, educación, ciencia y tecnología, el modelo latinoamericano evidencia una dependencia de la coyuntura política y una débil articulación interinstitucional. De ahí que los programas de fomento al emprendimiento se perciban, con frecuencia, como políticas reactivas frente al desempleo o la informalidad, más que como parte de una estrategia estructural de desarrollo productivo. Esta constatación cuestiona las interpretaciones funcionalistas que asocian automáticamente el emprendimiento con crecimiento económico, y refuerza la tesis teórica según la cual el emprendimiento no es una variable exógena del desarrollo, sino una expresión de sus condiciones institucionales, sociales y culturales (Polanyi, 2007; Márquez, 2005).

El caso de China ilustra con claridad la eficacia del emprendimiento planificado cuando se integra a un sistema coherente de políticas públicas. La vinculación del emprendimiento con estrategias de seguridad social, inversión en infraestructura y fortalecimiento del capital humano permitió alcanzar resultados tangibles: crecimiento sostenido superior al 5 %, reducción masiva de la pobreza y consolidación de una clase media emergente. Este modelo muestra que el emprendimiento puede adquirir una función redistributiva, además de productiva, cuando el Estado actúa como regulador y facilitador del equilibrio entre mercado y bienestar.

Sin embargo, extrapolar esta experiencia al contexto latinoamericano resulta problemático. Las estructuras económicas de la región, marcadas por la heterogeneidad productiva, la informalidad estructural y la debilidad institucional, impiden replicar mecánicamente los modelos asiáticos. En América Latina, los programas de emprendimiento suelen carecer de continuidad y evaluación, lo que limita su impacto sostenido y genera una alta rotación de proyectos sin consolidación. Desde un punto de vista teórico, esta situación coincide con las advertencias de la economía institucional sobre la relevancia de las “reglas del juego” (North, 1990): sin un entorno institucional estable, las iniciativas emprendedoras no logran traducirse en desarrollo.

En este marco, el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) constituye una herramienta empírica relevante para contrastar el discurso político con la

realidad estructural de los países de la región. Los resultados muestran que América Latina se mantiene rezagada frente a otras regiones en tres dimensiones críticas: la formación de talento emprendedor, la consolidación de una cultura innovadora y la producción de conocimiento científico y tecnológico aplicado a los negocios. Estas deficiencias corroboran la hipótesis de que la llamada “cultura emprendedora latinoamericana” es más un constructo discursivo que una realidad sistémica, sostenido en valores ideales, pero con escaso soporte institucional y material.

En consecuencia, los hallazgos invitan a reformular el paradigma del emprendimiento en América Latina desde una mirada crítica y contextual. Más que replicar modelos importados, se requiere redefinir el papel del Estado como articulador de ecosistemas emprendedores, capaces de integrar innovación, equidad y sostenibilidad. Ello implica superar la visión instrumental del emprendimiento como mera respuesta al desempleo, para concebirlo como un componente de un proyecto de desarrollo endógeno e inclusivo, que reconozca las condiciones sociales y territoriales donde se inscribe la práctica emprendedora.

Colombia: un modelo institucionalizado con tensiones

El caso colombiano constituye un referente significativo de institucionalización del emprendimiento en América Latina. Desde la promulgación de la Ley 1014 de 2006, el país ha desarrollado un entramado normativo y organizacional que vincula al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cámaras de comercio, las universidades y diversas entidades financieras, en redes nacionales y regionales de apoyo (Hidalgo et al., 2014). Este diseño ha permitido adaptar lineamientos nacionales a las particularidades socioeconómicas de cada departamento, lo que distingue al modelo colombiano de otros enfoques regionales más centralizados o asistemáticos.

La experiencia de Medellín se destaca como paradigma de innovación territorial. Proyectos como Ruta N, la incubadora CREAME y los programas impulsados por la Cámara de Comercio de Medellín han consolidado un ecosistema emprendedor sustentado en la cooperación entre Estado, academia y sector privado. Este entramado interinstitucional ha sido clave para convertir a Medellín en un auténtico “laboratorio de innovación” reconocido internacionalmente, en el que el emprendimiento se concibe como vector del desarrollo urbano y social (Macías Prada & Ríos Mesa, 2022). A diferencia de otros contextos latinoamericanos, la continuidad política y la planificación de largo plazo han permitido sostener los procesos de innovación, fortaleciendo el tejido empresarial y promoviendo la adopción tecnológica.

Sin embargo, este modelo también revela tensiones estructurales que desafían su sostenibilidad. En primer lugar, la dependencia del financiamiento público limita la autonomía y escalabilidad de los proyectos, reproduciendo dinámicas de centralización en torno a los recursos estatales. En segundo lugar, las desigualdades regionales continúan siendo un obstáculo: mientras Medellín avanza hacia la Cuarta Revolución Industrial, otras regiones permanecen rezagadas, sin la infraestructura ni el capital humano necesarios para integrarse al mismo ritmo. Este desequilibrio territorial evidencia lo que la teoría del desarrollo endógeno advierte: la innovación concentrada en polos urbanos tiende a profundizar las asimetrías socioespaciales si no se articula con estrategias de redistribución y fortalecimiento local (Vázquez Barquero, 2009).

Por otro lado, el desafío de incluir a sectores vulnerables —mujeres, jóvenes, comunidades rurales y afrodescendientes— sigue siendo una deuda pendiente. Pese a los avances institucionales, los programas de emprendimiento en Colombia han mostrado una limitada capacidad para generar movilidad social sostenida. Este punto pone en tensión la narrativa de éxito institucional, al revelar que la innovación tecnológica no garantiza, por sí sola, la inclusión social. De hecho, puede reproducir exclusiones preexistentes si no se acompaña de políticas de acceso al crédito, formación técnica y acompañamiento territorial.

En suma, el modelo colombiano aporta lecciones relevantes sobre la importancia de la coherencia institucional y la continuidad política en la promoción del emprendimiento. No obstante, también muestra los límites de la institucionalización cuando esta no se acompaña de mecanismos de equidad territorial y social. La discusión invita, por tanto, a repensar la escalabilidad de los

ecosistemas emprendedores: más que replicar el modelo de Medellín, los países de la región necesitan construir estrategias adaptadas a sus capacidades estatales y a la diversidad de sus territorios, equilibrando el impulso a la innovación con la justicia social y la cohesión territorial.

Ecuador: entre altas tasas de emprendimiento y baja sostenibilidad

El caso ecuatoriano ofrece un contraste paradigmático respecto al modelo colombiano. Los informes del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) destacan al país entre los de mayor espíritu emprendedor de la región, ubicándolo en el segundo lugar después de Perú. No obstante, esta aparente vitalidad contrasta con la fragilidad estructural de los proyectos: el 99 % de los emprendimientos son unipersonales y la mayoría no supera los tres primeros meses de operación (GEM, 2018). El panorama revela una paradoja central: altas tasas de actividad emprendedora no equivalen a desarrollo sostenible, especialmente cuando predominan los emprendimientos por necesidad y se carece de un entorno institucional estable.

Este fenómeno permite matizar críticamente la noción de “sociedad emprendedora” que algunos discursos políticos atribuyen al Ecuador. En términos teóricos, la situación confirma lo señalado por la literatura sobre emprendimiento de subsistencia (Kantis et al., 2020): cuando el emprendimiento surge como respuesta a la precariedad del mercado laboral y no como opción estratégica de innovación, su capacidad de transformar la estructura productiva es limitada. La informalidad y la ausencia de políticas integrales de apoyo generan un círculo vicioso en el que el emprendimiento, lejos de dinamizar la economía, reproduce formas de vulnerabilidad y autoempleo precario.

El análisis de los factores asociados a esta fenómeno muestra que, pese a la elevada autoperccepción de habilidades y la disposición a emprender, las competencias de gestión y la formación técnica siguen siendo insuficientes. A ello se suman la falta de acceso al crédito, la debilidad institucional y la fragmentación de las políticas públicas, lo que impide consolidar ecosistemas sostenibles. Desde una perspectiva institucionalista, la ausencia de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno y los sectores productivos impide que el emprendimiento se inserte en una estrategia de desarrollo nacional coherente, como ocurre en los modelos asiáticos o en el propio caso colombiano.

Por otra parte, el perfil demográfico del emprendedor ecuatoriano –concentrado en el rango de 30 a 49 años y con escasa participación juvenil y senior– revela una estructura poco diversificada del ecosistema emprendedor. Este dato tiene implicaciones relevantes para las políticas públicas: la exclusión de los jóvenes limita la renovación del tejido innovador, mientras que la falta de programas orientados al “emprendimiento senior” desaprovecha el capital de experiencia acumulado en generaciones mayores. La literatura reciente subraya que los ecosistemas más resilientes son aquellos que combinan diversidad etaria, cultural y sectorial, lo que todavía representa un desafío pendiente en Ecuador.

De allí que, el caso ecuatoriano pone de relieve los riesgos de idealizar el emprendimiento como motor automático de desarrollo. Sin políticas integrales que garanticen acceso al financiamiento, acompañamiento técnico y formación en innovación, las elevadas tasas de actividad emprendedora se traducen más en una multiplicación de iniciativas precarias que en la consolidación del tejido productivo nacional. De este modo, Ecuador ilustra con claridad que la promoción del emprendimiento, desprovista de planificación, puede derivar en un espejismo estadístico de dinamismo económico, sin impactos reales en la productividad, la equidad ni la sostenibilidad.

Chile: liderazgo regional y desafíos de sostenibilidad

Chile se ha consolidado como líder regional en materia de clima emprendedor y facilidad para hacer negocios, ocupando el puesto 34 a nivel mundial según el índice Doing Business (Banco Mundial, 2013). Este posicionamiento no es casual: el Estado chileno ha desempeñado un papel protagónico en la institucionalización del emprendimiento, especialmente a través de la

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y INNOVA Chile, entidades que impulsaron fondos de capital semilla, redes de inversionistas ángeles y mecanismos mixtos de capital de riesgo (Hidalgo et al., 2014). El programa Start-Up Chile, creado en 2010, se convirtió en el emblema de esta estrategia al ofrecer financiamiento, mentorías y redes de incubación a emprendedores nacionales y extranjeros, situando al país como referente en la atracción de talento internacional.

Sin embargo, el análisis crítico revela contradicciones estructurales que relativizan el aparente éxito del modelo. Aunque Chile ha logrado proyectarse como un polo de innovación tecnológica, el impacto real del programa no es proporcional a los recursos invertidos. Apenas el 19 % de los proyectos apoyados corresponde a iniciativas nacionales, mientras que la mayoría proviene de Estados Unidos, India y otros países sudamericanos (Hidalgo et al., 2014). Este dato sugiere que, más que fortalecer un ecosistema endógeno, Start-Up Chile ha funcionado como plataforma de internacionalización, beneficiando a emprendedores extranjeros que, en muchos casos, no mantienen un vínculo sostenible con el territorio una vez concluido el programa. Desde una perspectiva teórica, ello plantea una tensión entre el modelo de innovación globalizada –basado en la atracción de capital humano internacional– y el modelo de desarrollo endógeno, centrado en fortalecer capacidades locales.

Asimismo, el marcado centralismo en Santiago refuerza las desigualdades territoriales y limita la difusión del dinamismo emprendedor hacia regiones con menor capacidad institucional y tecnológica. En este punto, la experiencia chilena confirma las advertencias de la literatura sobre polarización territorial (Boisier, 2005): los polos de innovación, si no se acompañan de políticas redistributivas, tienden a reproducir la concentración de oportunidades y la exclusión de las periferias. De este modo, la brecha entre el ecosistema santiaguino y el resto del país pone de manifiesto que la sofisticación institucional no garantiza inclusión, sino que puede amplificar las asimetrías socioespaciales.

Frente a estas limitaciones, han surgido iniciativas orientadas a diversificar el modelo y fortalecer la dimensión social del emprendimiento, como las incubadoras de innovación social –por ejemplo, Socialab– que buscan promover proyectos con impacto comunitario y ambiental. Aunque su peso dentro del ecosistema aún es marginal, estas experiencias reflejan un cambio de paradigma hacia un emprendimiento más inclusivo y sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La consolidación de este enfoque requerirá políticas públicas capaces de equilibrar la atracción de capital extranjero con el fortalecimiento del tejido productivo nacional, evitando que la globalización del emprendimiento derive en una nueva forma de dependencia tecnológica y cognitiva.

La experiencia chilena demuestra que la institucionalización del emprendimiento y la disponibilidad de recursos financieros son condiciones necesarias, pero no suficientes para un desarrollo sostenible. El desafío radica en convertir la innovación en un proceso socialmente distribuido, donde las políticas públicas no solo incentiven la competitividad global, sino que también garanticen la cohesión territorial, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

Venezuela: turismo comunitario y sostenibilidad local

El caso venezolano introduce una dimensión alternativa del emprendimiento, centrada en el turismo comunitario como estrategia de desarrollo local y de cohesión social. En el estado Cojedes, diversos grupos poblacionales han promovido la valorización de los recursos naturales, culturales y folklóricos como base de proyectos de turismo rural sustentable, orientados tanto a la generación de ingresos como a la preservación de las identidades locales (Peña de Marchán, 2022). Esta experiencia ilustra cómo el emprendimiento puede trascender su dimensión estrictamente económica para convertirse en una herramienta de empoderamiento colectivo, alineada con los principios del desarrollo sostenible y de la economía social.

A diferencia de los modelos fuertemente institucionalizados, como el chileno o el colombiano, el emprendimiento venezolano de base comunitaria emerge en contextos de debilidad institucional

y crisis económica, lo que acentúa su carácter endógeno. En ausencia de un marco estatal sólido, las comunidades han asumido un rol protagónico en la organización, gestión y sostenimiento de sus proyectos turísticos, demostrando una notable capacidad de autoorganización y resiliencia. Desde la teoría de la gobernanza local, este tipo de iniciativas se interpreta como una forma de autogobierno participativo, en la que la comunidad sustituye parcialmente las funciones del Estado, articulando recursos simbólicos, sociales y ambientales para sostener su economía.

Sin embargo, el diagnóstico revela limitaciones estructurales significativas. La carencia de formación en gestión empresarial y turística, la escasa infraestructura y la falta de promoción estratégica obstaculizan la sostenibilidad de los emprendimientos. A ello se suma la ausencia de redes de colaboración intersectorial que faciliten el acceso a mercados, asistencia técnica y financiamiento. Estas debilidades evidencian la brecha entre el potencial del emprendimiento comunitario y las condiciones materiales necesarias para su consolidación. Como advierte la literatura sobre desarrollo local sostenible, el éxito de este tipo de experiencias depende no solo del capital social disponible, sino también de la articulación entre Estado, comunidad y sector privado (Alburquerque, 2001).

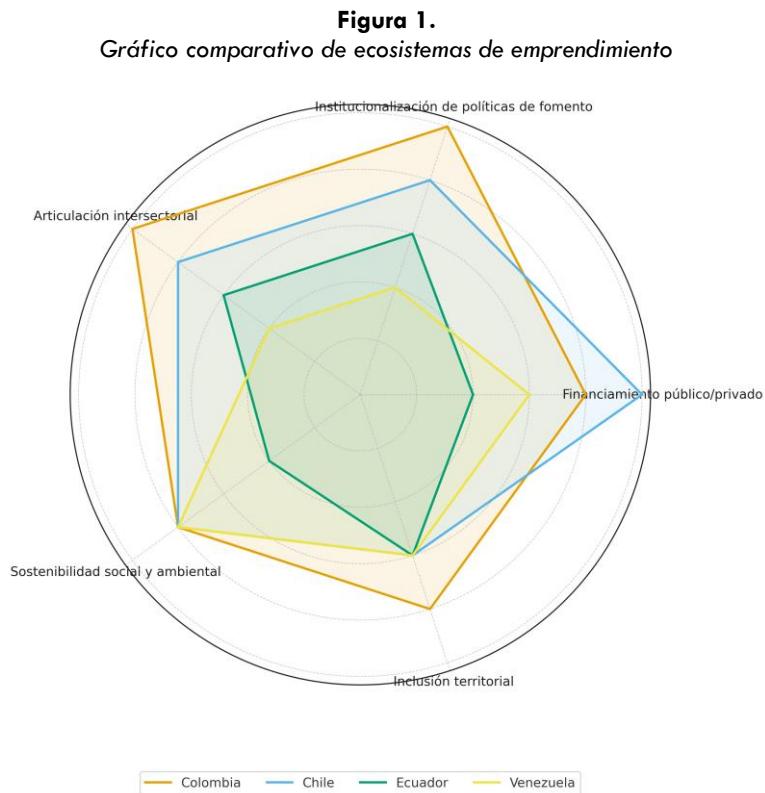
Pese a las restricciones, el caso venezolano aporta una lección crucial para el debate regional: la sostenibilidad social puedeemerger incluso en escenarios de precariedad institucional, siempre que exista un sentido de pertenencia territorial y una identidad colectiva fuerte. En este contexto, el turismo comunitario se convierte en un catalizador de innovación social, donde la participación ciudadana y la gestión compartida de los recursos naturales se traducen en beneficios tangibles para las comunidades. La clave está en pasar del emprendimiento de subsistencia al emprendimiento socialmente sostenido, capaz de generar capital relacional y preservar el patrimonio cultural y ambiental.

En este sentido, la experiencia venezolana evidencia que el emprendimiento turístico comunitario no solo diversifica la economía local, sino que reconfigura las relaciones entre Estado, sociedad y territorio, ofreciendo una vía de desarrollo más inclusiva y resiliente. Su fortalecimiento exige políticas públicas que reconozcan la centralidad de las comunidades como agentes del cambio, facilitando los medios para transformar sus capacidades en proyectos sostenibles y articulados al sistema productivo nacional.

Síntesis comparativa y aprendizajes

El examen comparativo de los casos analizados permite identificar patrones comunes y divergencias significativas en la institucionalización del emprendimiento en América Latina. Los datos del *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) y del Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) confirman una marcada heterogeneidad estructural: mientras Chile y Colombia exhiben marcos normativos estables, redes de apoyo consolidadas y un creciente capital emprendedor, Ecuador y Venezuela evidencian altas tasas de emprendimiento temprano acompañadas de baja sostenibilidad y débil soporte institucional (Cruz Oña y Andrade Sánchez, 2025).

Para visualizar de manera sintética estas diferencias, el siguiente gráfico radar muestra el nivel relativo de desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento en cinco dimensiones clave: institucionalización de políticas, financiamiento público/privado, inclusión territorial, sostenibilidad social y ambiental, y articulación intersectorial.



El gráfico evidencia que Colombia y Chile se posicionan con mayores niveles de institucionalización, financiamiento y articulación intersectorial, mientras que Ecuador y Venezuela destacan en sostenibilidad social y participación comunitaria, aunque con estructuras institucionales más frágiles. Esta lectura visual complementa el análisis empírico y refuerza la interpretación de que el éxito de los ecosistemas emprendedores depende menos del volumen de iniciativas que de la calidad del entorno político, institucional y social en que se insertan.

Desde una perspectiva comparada, los modelos más sólidos —como los de Chile y Colombia— se apoyan en una gobernanza colaborativa entre Estado, sector privado, academia y sociedad civil, que favorece la innovación y la difusión de conocimiento. En cambio, en países donde predominan la vulnerabilidad económica y la fragmentación institucional —Ecuador y Venezuela—, el emprendimiento tiende a ser de subsistencia y no logra consolidarse como una estrategia sostenible de desarrollo.

El análisis también demuestra que la sostenibilidad de los emprendimientos está estrechamente vinculada a su inserción territorial y social. Allí donde las estrategias de fomento integran innovación con inclusión —como en los programas de turismo comunitario venezolanos o las incubadoras sociales chilenas— surgen efectos multiplicadores en cohesión social y equidad. En contraste, la desarticulación entre niveles de gobierno y la discontinuidad de los programas reducen el impacto de las políticas y dificultan el aprendizaje colectivo.

De allí que, los resultados comparados invitan a repensar las políticas públicas de emprendimiento bajo un enfoque más integral. Más que un instrumento de crecimiento económico, el emprendimiento debe concebirse como un fenómeno multidimensional y relacional, donde confluyen la innovación, la equidad, la sostenibilidad y la cultura. Solo así podrá consolidarse como un verdadero motor de transformación social, capaz de articular productividad con justicia territorial, sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.

Triangulación documental

El resultado de la triangulación por cada estamento (comunidad local, instituciones públicas y academia), aportan una visión distinta, pero complementaria. La comunidad pone énfasis en la equidad y sostenibilidad, las instituciones en la eficiencia económica y la academia en la complejidad social y cultural. Se revelan como principales coincidencias entre todos estamentos las siguientes: el reconocimiento del emprendimiento como estrategia de desarrollo, la necesidad de políticas públicas adaptadas a realidades locales, el valor atribuible a la innovación y la cohesión social. Entre las divergencias destaca que las instituciones privilegian indicadores económicos, las comunidades por su parte priorizan la inclusión y la sostenibilidad y la academia critica la homogeneidad del discurso económico, con énfasis en la diversidad cultural. La triangulación metodológica con los documentos normativos referenciados, el estudio de caso y los datos secundarios (estadísticas GEM e ICSEd-Prodem) revelan la validez de los hallazgos de la investigación, permitiendo contrastar percepciones con evidencia empírica. Y por último la triangulación con el marco teórico entre autores clásicos y contemporáneos da cuenta que los primeros insisten en la importancia del emprendimiento a grandes rasgos, mientras los segundo enfatizan en la formulación de políticas públicas en el que se potencie el desarrollo endógeno. El marco teórico confirma que el emprendimiento no puede reducirse a un relato economicista, sino que debe entenderse como un fenómeno social, cultural y político, vinculado a la sostenibilidad y la cohesión comunitaria.

5. Conclusiones

El análisis del emprendimiento como expresión del desarrollo económico y, en particular, como eje de las políticas públicas en el ámbito turístico, permite afirmar que este fenómeno trasciende la visión economicista que lo concibe únicamente como motor de crecimiento y competitividad. Los hallazgos del estudio confirmarán que el emprendimiento en América Latina constituye un proceso multidimensional, condicionado por factores históricos, sociales, culturales e institucionales, cuya interacción explica tanto su diversidad como sus desigualdades estructurales.

La revisión teórica y la comparación internacional, especialmente con el caso chino, evidencian que el emprendimiento puede transformarse en un instrumento redistributivo y de cohesión social, siempre que se integre a estrategias de desarrollo de largo plazo sostenidas por instituciones sólidas y políticas coherentes. Sin embargo, en América Latina prevalecen condiciones de vulnerabilidad estructural —pobreza, informalidad, desigualdad y volatilidad política— que restringen la replicabilidad de tales modelos y limitan el alcance real del emprendimiento como herramienta de movilidad social.

El estudio de casos nacionales revela contrastes significativos. Colombia y Chile han logrado institucionalizar ecosistemas emprendedores relativamente estables gracias a la continuidad política, la cooperación público-privada y la inversión sostenida en innovación. Ecuador muestra una paradoja: altas tasas de intención emprendedora, pero baja sostenibilidad y predominio del emprendimiento por necesidad, reflejo de un entorno institucional débil. Por su parte, Venezuela, a través del turismo comunitario, evidencia la posibilidad de articular emprendimiento, identidad cultural y sostenibilidad local, aunque enfrenta severas limitaciones en infraestructura, formación y gobernanza.

En perspectiva comparada, los resultados permiten afirmar que el éxito del emprendimiento no depende exclusivamente del dinamismo individual o del capital económico, sino de la existencia de un entorno institucional inclusivo y articulado, donde converjan Estado, sector privado, academia y sociedad civil. Solo bajo esta lógica de gobernanza colaborativa es posible transitar de un emprendimiento de subsistencia hacia uno de innovación social y territorial.

El contraste entre los casos analizados sugiere que las políticas públicas de fomento al emprendimiento deben trascender la lógica de programas coyunturales y fragmentados, avanzando hacia marcos integrales y sostenibles que reconozcan la diversidad de motivaciones emprendedoras. Esto implica diferenciar las estrategias orientadas al emprendimiento por

oportunidad, centradas en la innovación y la competitividad, de aquellas dirigidas al emprendimiento por necesidad, que demandan medidas específicas de inclusión social, acceso al financiamiento y fortalecimiento de capacidades de gestión.

Como contribución al conocimiento, este estudio ofrece una mirada crítica e interdisciplinaria que integra dimensiones económicas, sociales y culturales del emprendimiento, subrayando su valor como puente entre el crecimiento económico, la cohesión territorial y la sostenibilidad social. Además, abre líneas de reflexión sobre el potencial del emprendimiento turístico comunitario como instrumento de preservación de identidades culturales, promoción de la sostenibilidad ambiental y generación de bienestar colectivo, superando la visión reduccionista del emprendimiento como simple mecanismo de creación de riqueza.

En el plano de las políticas públicas, se derivan varias recomendaciones clave: i) fortalecer la gobernanza colaborativa entre Estado, sector privado, academia y comunidades; ii) diseñar políticas sensibles al territorio que integren tanto el emprendimiento empresarial como el comunitario; iii) asegurar la continuidad institucional y la estabilidad presupuestaria para evitar la fragmentación de las iniciativas; y iv) fomentar investigaciones comparadas y evaluaciones de impacto que midan la contribución real del emprendimiento a la equidad social y a la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, el estudio subraya la necesidad de redefinir el papel del emprendimiento dentro de las políticas públicas, en especial en el ámbito turístico, para que deje de concebirse como un fin en sí mismo y se consolide como un instrumento estratégico de transformación social, económica y territorial. Esto requiere transitar de programas dispersos hacia políticas integrales y sostenidas en el tiempo, con capacidad para articular actores, recursos e instituciones en torno a un proyecto común de desarrollo.

El desafío político radica en reorientar la acción del Estado desde un enfoque meramente asistencial o regulador hacia un papel facilitador y articulador, capaz de generar condiciones para que los ecosistemas emprendedores florezcan en todo el territorio. Ello implica fortalecer la planificación intersectorial, la descentralización efectiva, la formación de capacidades locales y la creación de mecanismos de evaluación participativa que midan no solo el rendimiento económico, sino también el impacto social, cultural y ambiental de las políticas.

En este marco, las futuras investigaciones deberían profundizar en la relación entre emprendimiento, gobernanza pública y sostenibilidad, explorando cómo los ecosistemas locales pueden convertirse en plataformas de innovación social, cohesión comunitaria y resiliencia ambiental. Solo a partir de una agenda pública coherente y territorialmente sensible, el emprendimiento podrá afirmarse como un motor de equidad, integración y desarrollo sostenible, contribuyendo a redefinir el papel del Estado y a fortalecer la capacidad transformadora de las sociedades latinoamericanas.

Referencias

- Bennett, D. L., Boudreux, C., & Nikolaev, B. (2022). Populist Discourse and Entrepreneurship: The Role of Political Ideology and Institutions. *Journal of International Business Studies*, 1-55. Doi :<https://doi.org/10.1057/s41267-022-00515-9>
- Berjani, D., Van Burg, E., & Verduijn, K. (2023). Discursive threads in entrepreneurship policy texts: a content and discourse analysis of entrepreneurship policy documents in (The Netherlands & Kosovo). *Entrepreneurship & Regional Development*, 35(3-4), 297-316. Obtenido de <https://doi.org/10.1080/08985626.2022.2161014>
- Bygrave, W. D., & Hofer, C. W. (1991). Theorizing about Entrepreneurship. *and Charles W. Hofer*, 16(2), 13-22. Obtenido de <https://doi.org/10.1177/10422587920160020>

- Brattström, A., & Wennberg, K. (2021). The Entrepreneurial Story and Its Implications for Research. *Journal of Business Venturing*, 46(6), 1443-1468. doi: <https://doi.org/10.1177/10422587211053802>
- Caliskan, K. &. (2022). Entrepreneurialism as Discourse: Toward a Critical Research Agenda. *Research in Sociology of Organizations*, 72(81), 43–53. doi:10.1108/S0733-<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4233528>
- Chalmers, D., Honecker, F., Johnson, D., & Milne, G. (2025). Entrepreneurship and ideology: Accelerationism, degrowth, and the emerging political economy of venture creation. *Journal of Business Venturing Insights*. Doi <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2025.e00566>
- Chalmers, D., Honecker, F., Johnson, D., & Milne, G. (s.f.). Entrepreneurship and ideology: Accelerationism, degrowth, and the emerging political economy of venture creation. *Journal of Business Venturing Insights*, 1-10. doi.org/<https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2025.e00566>
- Cruz Oña, A. O., & Andrade Sánchez, E. (2025). Convergence between artificial intelligence and audiovisual production: A Bibliometric Analysis of its Evolution, Trends and Contributions (2000-2024). *VISUAL REVIEW. Revista Internacional De Cultura Visual*, 17(5), 153-171. doi: <https://doi.org/10.62161/revvisual.v17.5938>
- Dacin, P. A., Dacin, M. T., & Matear, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here. *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 37-58. <https://n9.cl/c14b9v>
- Gartner, W. B. (1988). Who is an entrepreneur? Is the wrong question. *American Journal of Small Business*, 12(4), 11-32. doi: <https://doi.org/10.1177/104225878801200401>
- Gil Ibañez, M., Sans Serrano, A., Lavandeira Menedo, Y., & Llorens Plana, M. (2025). Impact of Augmented Reality on Generation Z's Purchasing Intention: Behavior Analysis in a Digital Environment. *VISUAL REVIEW. Revista Internacional De Cultura Visual*, 17(5), 17-29. doi: <https://doi.org/10.62161/revvisual.v17.5938>
- Greco, A., & Jong, G. (2017). *Sustainable entrepreneurship: definitions, themes and research Gaps*. Groningen, The Netherlands: Centre for Sustainable Entrepreneurship. <https://n9.cl/u1ilw>
- Herrera Mendoza, K., & Gutiérrez, J. M. (2014). El emprendimiento como iniciativa para la creación de empresas: Análisis de la perspectiva psicológica y contextual. *Revista de Ciencias Sociales*, 20(2), 288–302. <https://n9.cl/3l0rsl>
- Hidalgo, G., Kamiya, M., & Reyes, M. (2014). Emprendimientos dinámicos en América Latina. Avances en prácticas y políticas. *Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva* (16), 1-88. <https://n9.cl/eo4ic>
- Kirzner, I. (1979). *Perception, opportunity, and profit. Studies in the theory of entrepreneurship*. Chicago: The University of Chicago Press. <https://n9.cl/1ms9b>
- Khyareh, M. M. (2023). Entrepreneurship and Economic Growth: The Moderating Role of Governance Quality. *FIIB Business Review*, 11(3), 283-297. doi:<https://doi.org/10.1177/23197145231154767>
- Larroulet, C., & Ramirez, M. (2007). Emprendimiento: Factor clave para la nueva etapa de Chile. *Estudios públicos*(108), 93-116. <https://n9.cl/1b5dyx>
- Lee, S. S. (2023). Entrepreneurship for all? The rise of a global “entrepreneurship for development” agenda, 1950–2021. *World Development*, 166. <https://n9.cl/6wpsd>

- Lubinski, C., & Knox Tucker, H. (2025). Entrepreneurialism: conceptual exploration of an ideology. *Entrepreneurship & Regional Development*, 1-17. doi: <https://doi.org/10.1080/08985626.2025.2547038>
- Lundmark, E., Milanov, H., & Christian Seigner, B. D. (2022). Can it be measured? A quantitative assessment of critiques of the entrepreneurship literature. *Journal of Business Venturing Insights*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00301>
- Luque González, A., Bengoetxea Alkorta, A., & Fernando Álvarez, J. (2021). Los Procesos de Responsabilidad Social en la Economía Social y sus Confrontaciones. *Revista Prisma Social*(35), 1-6. Obtenido de <https://revistaprismasocial.es/article/view/4572>
- Maca Urbano, D. Y., & Rentería Pérez, E. (2020). Una mirada al emprendimiento a partir de una revisión de la literatura. *Psicología desde el Caribe*, 37(1), 107-136. <https://doi.org/10.14482/psdc.37.1.001.42>
- Manning, S., & Vavilov, S. (2023). Global development agenda meets local opportunities: The rise of development-focused entrepreneurship support. *Research Policy*, 52(7), 1-17. doi: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104795>
- Marquez, F. (2005). El crédito a talleres, artesanos, negocios y microempresas: su incidencia en la pobreza. En AA.VV, *Microcréditos contra la pobreza* (pág. 90-120). Santiago de Chile: Fundación para la superación de la pobreza.
- Muhammad, T., & Burkib, U. (2023). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from the emerging BRICS. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*(9), 1-7. doi: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100088>
- Palomeque, R. D. (2002). *El ejército y el apoyo a la comunidad. "Un puente de transferencia"*. Kansas: Combined Arms Center Military Review, Fort Leavenworth.
- Pascal Dey, D. F., & Verduijn, K. (2022). Critical research and entrepreneurship: A cross-disciplinary conceptual typology. *International Journal of Management Reviews*(25), 24-51. doi: <https://doi.org/10.1111/ijmr.12298>
- Peña de Marchán, Y. (2022). *Turismo comunitario sustentable y cultura de emprendimiento desde la sociopraxis creadora*. Cojedes, Venezuela: feduez, Fundación Editorial Universidad Ezequiel Zamora. <https://n9.cl/n5lt3>
- Polanyi, K. (2007). *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Puello Socarrás, J. F. (2010). Del homo œconomicus al homo redemptoris: Emprendimiento y Nuevo Neo-liberalismo. *Otra Economía. Revista Latinoamericana de economía social y solidaria*, 4(6), 181-206. <https://n9.cl/qp09i3>
- Rodríguez, C., & Jiménez, M. (2005). Emprenderismo, acción gubernamental y academia. Revisión de la literatura. *Innovar*, 15(26), 73-89. <https://n9.cl/nuopl>
- Shaver, K. G., & Scott, L. R. (1991). Person, process, choice: The psychology of new venture creation. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(2), 23-45. <https://n9.cl/0bd8d>
- Schumpeter, J. (1928). Unternehmer. En AA.VV, *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (pp. 476-487). Jena: Verlag von G. Fischer.
- Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*, 25(1), 217-226. <https://n9.cl/h19dw>

- Solís Montoya, V. L., & Castillo Herrera, B. (2021). Pluralidad en las teorías del emprendimiento. *Revista Científica de FAREM-Estelí*, 76-95. <https://doi.org/10.5377/farem.v0i0.11609>
- Teasdale, S., Bellazzecca, E., De Bruinn, A., & J Roy, M. (2023). The Revolution of the Social Entrepreneurship Concept: A Critical Historical Review. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 52(1), 212S-240S. Obtenido de <https://doi.org/10.1177/08997640221130691>
- Uharte Pozas, L. M., Hernández Bertone, J., & Curto, S. (2023). Economía solidaria: sinergias y conflictos con lo público. *Revista Prisma Social*(42), 1-3. <https://n9.cl/fc3n2>
- Wadhwani, R. D., & Lubinski, C. (2025). Hype: Marker and Maker of Entrepreneurial Culture. 40(2), 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2024.106455>
- Weber, M. (1984). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Puebla: Premia. <https://n9.cl/vbszb>